

MINISTERIO PÚBLICO C/ JOSE RAFAEL YAÑEZ ROJAS
DELITOS DE AMENAZAS EN CONTEXTO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR,
DAÑOS SIMPLES, PORTE DE ARMA DE FUEGO PROHIBIDA, TENENCIA
ILEGAL DE MUNICIONES
RUC 2000056071-6
RIT 18-2021

Puente Alto, veinte de abril de dos mil veintiuno.

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Individualización del Tribunal e intervinientes. Que con fecha quince de abril del presente año, ante este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puente Alto, constituido por los magistrados Hugo Espinoza Castillo, en calidad de juez presidente de sala, Françoise Giroux Mardones en calidad de jueza integrante y Marcela Labra Todorovich en calidad de jueza redactora, se llevó a efecto el juicio oral R.I.T. 18-2021, RUC 2000056071-6, seguida en contra de **JOSE RAFAEL YAÑEZ ROJAS**, cédula de identidad 14.247.016-0, nacido en San Javier el día 16 de septiembre de 1974, de actuales 46 años, casado, comerciante, domiciliado en calle Salvador Allende N° 81, Comuna de Puente Alto.

Fue parte acusadora el Ministerio Público, representado por el Fiscal don Javier Carreño Lavín, y la defensa del acusado estuvo a cargo de la defensora privada doña Jeannette Cofré Soto, ambos con domicilio y forma de notificación ya registrados en el Tribunal

SEGUNDO: Contenido de la Acusación. Que, según se indicó en el auto de apertura de juicio oral, el Ministerio Público sostuvo en su acusación los siguientes hechos:

Hecho N° 1:

“El día 23 de septiembre de 2019, en horas de la noche, alrededor de las 20:45 horas al interior del domicilio de sitio 22 campamento los areneros comuna de Puente Alto, el imputado JOSÉ RAFAEL YÁÑEZ ROJAS, procedió a amenazar de forma seria y verosímil a su cónyuge MARGARITA VEGA FERNANDEZ con quien tiene una hija en común señalándole “Te voy a matar concha de tu madre a vo y a la hija que tenemos”

Hecho N° 2:

“El día 14 de enero de 2020, alrededor del mediodía, JOSÉ RAFAEL YÁÑEZ ROJAS, ocasiono daños en el cerco perimetral del domicilio de MARGARITA VEGA FERNANDEZ ubicado en sitio 22 campamento los areneros comuna de Puente Alto, daños evaluados en la suma de \$500.000.”

Hecho N° 3:

“El día 14 de enero del año 2020, en horas de la tarde, aproximadamente a las 18:45 horas, en el domicilio de campamento los areneros N° 22 comuna de Puente Alto, el imputado JOSÉ RAFAEL YÁÑEZ ROJAS amenazo de forma seria y verosímil a su cónyuge Margarita Vega Fernández con quien tiene una hija en

común, señalándole: “te voy a matar maraca culia y a la niña, voy a buscar una escopeta y vuelvo”.

Posteriormente ese mismo día, momentos después, funcionarios de carabineros sorprendieron en la vía pública, en el sector frente al sitio 20 de campamento los areneros comuna de Puente Alto, al imputado JOSÉ RAFAEL YÁÑEZ ROJAS manteniendo en su poder sin contar con autorizaciones competentes, un arma de fuego, tipo escopeta artesanal, y tres cartuchos de escopeta color azul, calibre 12, marca Tek.”

Calificación jurídica.

El Ministerio Público calificó estos hechos como sigue:

Hecho N° 1: AMENAZAS EN CONTEXTO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, del artículo 296 N° 3 del Código Penal, en relación con ley 20.066.

Hecho N° 2: DAÑOS SIMPLES, del artículo 487 del Código Penal.

Hecho N° 3: AMENAZAS EN CONTEXTO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, del artículo 296 N° 3 del Código Penal en relación con ley 20.066, **PORTE DE ARMA PROHIBIDA** del artículo 14 de la ley 17798, y **PORTE O TENENCIA DE MUNICIONES** del inciso 2° del artículo 9 de la ley de control de armas.

Grado de desarrollo del delito y participación atribuida al acusado:

Todos los delitos de acuerdo con el Ministerio Público se encontrarían **CONSUMADOS**, y en ellos se le atribuye al acusado la participación en calidad de **AUTOR**, ya que habría tomado parte en la ejecución de los hechos de una manera inmediata y directa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal.

Circunstancias Modificadorias de la Responsabilidad Penal:

Señala el Ministerio Público que respecto del acusado no concurren circunstancias modificadorias de responsabilidad penal.

Penas solicitadas:

Finalmente, la fiscalía solicita se condene al acusado **JOSÉ RAFAEL YÁÑEZ ROJAS**, a las siguientes penas:

En relación con el hecho N° 1, por el delito de **AMENAZAS EN CONTEXTO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**, se le condene a la pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, las accesorias legales del artículo 30 del código penal, las accesorias especiales de la letra B y C del artículo 9 de la ley 20.066 por el plazo de 2 años, y se le condene al pago de costas conforme a lo previsto en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal.

En relación con el hecho 2, por el delito de **DAÑOS SIMPLES**, se le condene a la pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, las accesorias legales del artículo 30 del código penal, y se le condene al pago de

costas conforme a lo previsto en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal.

En relación al hecho 3, por el delito de **PORTE DE ARMA DE FUEGO PROHIBIDA**, se le condene a la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo; las accesorias legales establecidas en el artículo 29 del Código Penal, esto es la de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena; el comiso de las especies del delito, incorporación de huella genética en registro de ADN, y se le condene al pago de costas conforme a lo previsto en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal, y se le condene por el delito de **TENENCIA ILEGAL DE MUNICIONES**, se le condene a la pena de 2 años de presidio menor en su grado medio; las accesorias legales establecidas en el artículo 30 del Código Penal, esto es la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena; el comiso de los instrumentos y efectos del delito; y se le condene al pago de costas conforme a lo previsto en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal, y por el delito de **AMENAZAS EN CONTEXTO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**, a la pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, las accesorias legales del artículo 30 del código penal, las accesorias especiales de la letra B Y C del artículo 9 de la ley 20.066 por el plazo de 2 años, y se le condene al pago de costas conforme a lo previsto en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal.

TERCERO: Alegatos de apertura. La **fiscalía en su alegato de apertura** señaló, en síntesis, que logrará acreditar más allá de toda duda razonable los hechos materia de la acusación y participación culpable que le cabe al acusado en estos.

Refiere que se relatará la historia que existe entre la víctima y el imputado en cuanto al historial de amenazas que ha sufrido ésta por parte del mismo. Señala que será la propia víctima quien relatará el contexto de violencia intrafamiliar y los delitos sufridos, así como también darán cuenta los funcionarios aprehensores del procedimiento que partió como violencia intrafamiliar y que permitió luego la incautación del arma de fuego que mantenía el imputado en la vía pública, todo lo cual será corroborado por la prueba pericial y documental.

En su **alegato de apertura la defensa** señala, en resumen, que instará por la absolución de su representado, ya que el Ministerio Público no podrá probar los hechos imputados al mismo ya que la prueba será insuficiente. De la misma forma, refiere que quedará acreditado realmente lo que ha sucedido durante toda esta trayectoria, como dijo el propio fiscal, de cómo han sido los hechos de violencia y de parte de quién han nacido los mismos.

CUARTO: Declaración del Acusado. Que en la oportunidad establecida en el artículo 326 del Código Procesal Penal y previamente advertido de sus derechos, el acusado, **JOSÉ RAFAEL YÁÑEZ ROJAS**, decidió guardar silencio y no declarar en juicio.

QUINTO: Convenciones probatorias. Que, de conformidad con lo que quedó consignado en el considerando quinto del auto de apertura de juicio oral, los intervinientes no pactaron convenciones probatorias de ninguna especie.

SEXTO. Pruebas incorporadas al juicio oral por parte del Ministerio Público.

Que, por su parte, a fin de acreditar los presupuestos fácticos contenidos en la acusación fiscal, el órgano persecutor ofreció en estrados las siguientes probanzas:

PRUEBA TESTIMONIAL:

a.- Margarita Isabel Vega Fernández, cédula nacional de identidad N° 12.353.374-7, nacida en Santiago el 3 de enero de 1973, de actuales 48 años, casada, comerciante independiente, domiciliada en calle campamento los areneros N° 22, sitio 22, comuna de Puente Alto.

b.- José Rodolfo Aravena Torres, cédula Nacional de Identidad N° 11.176.607-K, nacido en Cauquenes con fecha 3 de agosto de 1967, de actuales 53 años, casado, funcionario de Carabineros de Chile, sargento primero de la 66° Comisaria de Bajos de Mena, domiciliado en Avenida Juanita 699 comuna de Puente Alto.

c.- Marcelo Antonio Melipil Vargas, cédula nacional de identidad N° 19.384.155-4, nacido en Puente Alto, con fecha 18 de junio de 1996 de actuales 24 años, soltero, funcionario de Carabineros de Chile, cabo segundo, dotación 20° Comisaria de Puente Alto, domiciliado en Balmaceda 431 comuna de Puente Alto.

d.- Fredy Antonio Opazo Diaz, cédula nacional de identidad N° 16.172.755-5, nacido en Santiago, con fecha 2 de agosto de 1985, de actuales 35 años, casado, funcionario de Carabineros de Chile Sargento Segundo de la Subcomisaria San Jerónimo, domiciliado en Real Audiencia N° 1254, comuna de Puente Alto.

PRUEBA PERICIAL:

1.- Gustavo Adolfo Mardones Silva, cédula nacional de identidad N°15.150.148-6, nacido en San Javier, el día 1 de septiembre de 1983, de actuales 37 años, soltero, perito armero del Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile, sargento segundo, domiciliado en Maule N°40, comuna de Santiago. Respecto de Informe Pericial Balístico N° 417 de fecha 9 de marzo de 2020, del Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile.

PRUEBA DOCUMENTAL:

1.- Oficio DGMN.DECAE (S) N° 6442/244/2020, de fecha 21 de enero de 2020, de la Dirección General de Movilización Nacional, suscrito por el General de Brigada HUGO LO PRESTI ROJAS, Director General de Movilización Nacional.

2.- Certificado de Matrimonio de José Rafael Yáñez Rojas y Margarita Isabel Vega Fernández.

3.- Certificado de nacimiento respecto de Josefa Saray Yáñez Vega.

OTROS MEDIOS PROBATORIOS:

1.- Una imagen que dice relación con Informe Pericial Balístico N°417, de fecha 9 de marzo de 2020, del Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile.

2.- 1 fotografía del arma y municiones.

SEPTIMO. Pruebas incorporadas al juicio oral por parte de la defensa. Que, por su parte, la defensa se valió de la prueba del Ministerio Público y además rindió la siguiente prueba propia en el juicio:

PRUEBA TESTIMONIAL:

a.- Teresa de Jesús Fuentealba Mesías, cédula de identidad N° 8.019.995-3, nacida en Santiago con fecha 7 de abril de 1959, de actuales 62 años, viuda, dueña de casa, con domicilio en Claudio Matte casa 25 Población Los Areneros, comuna de Puente Alto.

b.- Clara Aurora Pávez Rojas, cédula de identidad N° 8.386.757-4, nacida en Puente Alto con fecha 4 de junio de 1959, de actuales 61 años, soltera, dueña de casa, domiciliada en Pasaje 3 N° 1059, Salvador Allende, comuna de Puente Alto.

DOCUMENTAL:

1.- Acta de audiencia de fecha 10 de diciembre de 2020 seguida en contra de Margarita Isabel Vega Fernández, rit 14986-2019 del Juzgado de Garantía de Puente Alto.

2.- Solicitud de audiencia enviada por el señor Fiscal don Luis Pérez Letelier en causa rit 14986-2019 del Juzgado de Garantía de Puente Alto.

OCTAVO. Información aportada por la prueba de cargo. Que la información incorporada mediante la prueba rendida por el persecutor puede resumirse del modo que sigue.

Prestó declaración doña **MARGARITA ISABEL VEGA FERNANDEZ**, quien informada de su derecho en relación con el artículo 302 del Código Procesal Penal, ya que es la cónyuge del acusado, refiere que desea prestar declaración.

Luego, legalmente juramentada señala a la **interrogación del fiscal** que viene a declarar porque el día 23 de septiembre su marido llegó a su casa donde estaba ella sola con su hija, pateando la puerta y la insultó a ella y a su hija, aclarando que en realidad fue a ella más que a su hija a la que insultó y que la amenazó con que la iba a matar. En este sentido refiere que el acusado le dijo varios garabatos y la insultó. Señala que su esposo se encontraba ebrio y drogado, que él es drogadicto. Que ese día, cuando el imputado la estaba insultando, ella se dio vuelta y lo vio que sacó un arma, agrega que no sabe si era de verdad o no. Explica que al acusado le gustan las armas y que en esa oportunidad la sacó de la cintura y la amenazó que la iba a matar a ella y a su hija.

Agrega en su relato que en ese momento salió arrancando al patio con su hija, que salió a la calle pidiendo auxilio y llamó a Carabineros. Señala que cuando llegó carabineros su esposo ya no estaba, que había arrancado y que esa situación de escapar de carabineros ocurría normalmente.

Luego refiere que en enero del año siguiente pasó casi lo mismo pero esta vez empezó a gritarle de la calle hacia adentro de su casa, que luego él entró, que también la amenazó con que la iba a matar, diciéndole garabatos y que la iba a matar a ella y a su hija. Señala que le dijo muchos insultos y que le rompió el portón.

Agrega que luego llamó a Carabineros y que éstos, después de un patrullaje, le dijeron que lo habían detenido y que ello ocurrió alrededor de las 18:45 hrs. y que después de eso ya no supo nada más hasta que tuvo que ir a declarar.

Agrega que el acusado es muy violento y que es fanático de las armas, que siempre anda con escopeta y que tiene acceso a pistolas. Señala que varias veces antes, incluso cuando ella tenía 7 meses de embarazo, la amenazó con una escopeta, que en esa oportunidad ella se la tiró a la calle y un vecino se la devolvió. Reitera que él siempre ha tenido acceso a pistolas y armas y que ella le tiene miedo.

Ante la pregunta del fiscal señala que cuando se refiere al hecho del 23 de septiembre, se refiere al 23 de septiembre del año 2019, que en esa fecha la persona que la amenazó fue José Rafael Yáñez Rojas, que es su esposo y padre de su hija. Señala que ese día cuando recibió las amenazas ella estaba dentro de su casa en su domicilio ubicado en el Campamento Los Areneros, sitio 22 en la comuna de Puente Alto. Que este hecho ocurrió como a las 20:45 hrs.

De la misma manera le responde al fiscal que cuando se refiere al hecho de enero se refiere al hecho del 14 de enero del año 2020. Señala, con respecto a este hecho, que fue una situación que se desarrolló durante todo el día. Relata que ese día ella había salido a comprar cosas para su hija y volvió alrededor de mediodía a su casa, que al llegar el acusado se encontraba al interior del patio de su casa, que estaba ahí tomando y escuchando música. Frente a esa situación ella le dijo que tenía que irse de su domicilio porque ellos ya no estaban juntos y que fue en ese momento cuando la insultó y que siguió todo el día insultándola desde la calle. Refiere que el acusado andaba en su camioneta gris, que ponía andar su camioneta y pasaba en ella de un lado para otro insultándola. Luego señala que, el acusado comenzó a amenazarla gritándole para adentro de su casa y que ahí ella llamó alrededor de las 18:45 hrs a Carabineros y les señaló lo que había pasado. Posteriormente, señala que Carabineros le dijo que lo habían detenido porque andaba portando un arma.

Reitera la testigo que ese día 14 de enero estuvo el acusado todo el día molestándola, amenazándola y gritándole cosas desde la calle.

Señala que ese día 14 de enero además de amenazarla el acusado “le tiró la camioneta sobre su portón”.

Aclara, en este punto, que el acusado estuvo ese día también en la casa de unos vecinos tomando. Que cuando ella llegó a su casa él ya estaba tomando el interior de su patio y que luego se fue a tomar donde los vecinos. Refiere que luego ella cerró la puerta y él “tiró la camioneta” sobre su portón porque ella no lo dejó entrar. Señala la testigo que no sabe si realmente le quiso “tirar la camioneta al portón o a ella”, porque él quería entrar a la casa y ella no lo dejó y cerró la puerta. Señala que producto de esto el portón se cayó en su parte izquierda y que esos daños que tuvo el portón ella los avalúa en alrededor de 500.000 pesos, ya que debió llevar a una persona que lo arreglara y agregó que el acusado también le robó un equipo de música.

Aclara al fiscal que, el día 14 de enero, cuando ocurrieron los hechos, ella estaba en su casa, que primero había salido a hacer una compra para su hija y que cuando volvió él estaba ebrio, en el patio de su casa ubicado en el Campamento Los Areneros, sitio 22 en la comuna de puente alto y que éstos hechos comenzaron a ocurrir alrededor de las 12:00 hrs del día pero que al acusado lo tomaron detenido alrededor de las 19:00 hrs. Señala que las amenazas de que la iba a matar a ella y a su hija y que iba a buscar un arma, ocurrieron alrededor de las 18:45 hrs.

Refiere que en ese momento él la insultó y le decía cosas como que “la iba a matar, que era una maraca conche tu madre, perra, maraca, puta, a vos y a la hija, que ya no me sirven, cochina mantenida”

Señala que luego que le dijo que la iba a matar agregó que iba a ir a buscar una pistola y la iba a matar y que en esos momentos ella decidió llamar a Carabineros porque le dio mucho miedo, ya que sabe que él tiene acceso a armas.

Manifiesta que Carabineros llevaba un tiempo asistiendo a su casa por procedimientos de Violencia Intrafamiliar, ya que este tipo de hechos ya habían comenzado a ocurrir en septiembre y ella ya no podía dormir tranquila, entonces ese día le dijo a carabineros lo que pasaba, que el acusado había vuelto a molestarla y amenazarla y que ella tenía miedo, ya que la había amenazado con que iba a buscar una escopeta para matarla a ella con su hija.

Aclara que ella le tiene miedo al acusado porque ella sabe que él cumple las amenazas. Que ella lleva 7 años casada con él y lo conoce.

Señala que él nunca la ha golpeado, pero que él es fanático de las pistolas y de las escopetas, que es drogadicto y además “se maneja en un rubro como de mafioso” que ella señala no comprender.

Contrainterrogada por la defensa señala la testigo que el día de los hechos de septiembre ella estaba en su casa con su hija que tenía en esa época 6 años y él llegó a amenazarla a su casa pateando la puerta, que ese día ella llamó a carabineros por teléfono, que no acudió a la comisaría.

Señala que carabineros sacó fotografías a su casa, de los daños que ocurrieron el 23 de septiembre que no sabe si esas fotografías fueron entregados no a la Fiscalía y tampoco entregó boletas respecto del equipo musical que le habría robado el acusado.

Expresa que de todos los problemas que ha tenido con el acusado nunca ha sido agredida físicamente y que cuando el imputado tenía problemas con alguien siempre lo solucionaba amenazando con que “lo iba a matar, que lo iba a eliminar, que iba a pagar para que lo mataran con armas”. Agrega en este punto que el hermano de la señora que le arrendaba el sitio al acusado le vendió una pistola a su marido y que éste tenía balas que “manejaba” en su banano y que esa pistola se la vendió en \$ 300.000 pesos.

Agrega que ese día 14 de enero ella no podía salir de su casa porque él estuvo todo el día molestando desde afuera de la misma y que ella lo echó porque el andaba drogado.

Refiere que el acusado “le hacía a la falopa, a la cocaína” y que ese día de los hechos, cuando ella llegó de sus compras, él estaba tomando.

Señala que ella llama a carabineros primero, alrededor de las 12:15 hrs. a 12:30 hrs del día y que a esa hora acudieron a su domicilio, pero que el acusado se fue y no pudieron encontrarlo. Que luego ella los llamó nuevamente en la tarde, cuando el acusado comenzó a “salirse de mano en lo que decía” y empezó ella a sentir más miedo y su hija pequeña lloraba. Ahí fue cuando el acusado le dijo que iba a buscar una escopeta y que le iba a matar a ella y “a la hija que tenían”, entonces llamó por segunda vez a carabineros alrededor de las 18:30 hrs y ellos llegaron como 5 o 7 minutos después. En ese momento les señaló lo que había ocurrido, que el imputado había vuelto a amenazarlas y que a ella le estaba “entrando pánico”, porque la había amenazado con matarla a ella y a su hija.

Entonces Carabineros hizo un patrullaje y lo tomaron detenido cerca de su domicilio. Explica que ella vive en un lugar determinado y a él lo detuvieron como a 3 o 4 metros de la calle y que después de eso no sabe absolutamente nada más.

A la pregunta de la defensa sobre si ella fue formalizada por amenazas proferidas en contra de su marido, el acusado, señala que si, y que en esa oportunidad a ella le dijeron que no se podía acercar a su marido durante un año. Señala con respecto a ese caso, que ella no hizo nada de lo que se dijo, que nunca lo amenazó ni le dijo nada. Aclara que ese día ella llegó a su casa desde el colegio de su hija y él la llamó por teléfono y le dijo que fuera a buscar dinero para su hija. Que ella fue, pero no sola, fue acompañada con una señora que trabajaba para ella, que recibió el dinero y se fue.

Agrega que posteriormente, como un mes después, le llegó una citación diciendo que ella lo había amenazado y le había pegado. Señala que ella no tiene testigos de ese día, porque a “la niña que la acompañó”, el imputado la amenazó con una pistola en la cabeza, entonces, esa persona le tiene miedo y no fue a declarar, agregando que la persona que le sirvió de testigo a él, es una persona que tiene segundo medio y se hace pasar por enfermera, entonces que ella no tuvo cómo defenderse.

Señala la testigo que, en el campamento todos conocen como es el acusado y que él todo lo paga porque como es un campamento, la gente es pobre, entonces funciona con dinero. Reitera que toda la gente en el campamento le tiene miedo al acusado y que nadie la va a defender, que nadie va a ir a declarar por ella, que nadie le va a decir que sabe cómo es y que lo conoce y que ni siquiera “la niña” que trabajaba para ella lo haría, porque el acusado la apuntó con una pistola en la cabeza una vez en que le estaba preguntando si es que la declarante, tenía algún otro hombre y que le dijera la verdad, entonces “esta niña le tiene terror”.

Agrega que ella no tiene quien la defienda y señala que esa persona que trabaja para ella no hizo la denuncia en carabineros porque le tiene miedo.

Señala que, en el campamento, al imputado, todos le dicen “don Rafa” y que “nadie le puede decir nada”, que incluso ella en el trabajo le decía “don Rafa, porque él manda, él es el que alimenta, él es el que da todo”

Señala que el día 14 de enero, estaba su sobrina con las dos hijas menores de ella y que fue su sobrina la que la acompañó a hacer las compras en la mañana y cuando volvieron estaba el acusado. Pero expresa que su sobrina no va a declarar ni servirle como testigo porque también le tiene miedo a él, incluso tiene miedo de que le pudiera hacer “algo a sus dos niñas”. Reitera que ese día ella volvió de las compras alrededor de las 12:00 del día y él estaba adentro, en la camioneta.

Expresa que en el campamento ella vive con su hija mayor de 29 años y con su hija que actualmente tiene 8 años. Señala que su hija menor está las 24 horas del día con ella y que ella estaba el día que ocurrieron los hechos, pero que no la presentó como testigo porque es una pequeñita que tiene 8 años y que en esa época tenía 6 años. Refiere que su hija de 29 años vive con ella con sus dos nietos, pero que ella no estaba ese día, que llegó después, en la noche cuando ella la llamó para que le hiciera compañía porque ella estaba asustada.

Seguidamente presta declaración el funcionario de Carabineros **JOSE RODOLFO ARAVENA TORRES**, quien legalmente juramentado señala, **al interrogatorio del fiscal** que el día 14 de enero del año 2020 se encontraba de servicio de primer patrullaje de las 66° Comisaría de Bajos de Mena, acompañado del Cabo segundo Marcelo Melipil Vargas y del carabinero Christopher Namoncura Hidalgo.

Refiere que recibieron un comunicado radial por parte de la Central de Comunicaciones de Carabineros CENCO, consistente en que se trasladarán al Campamento Los Areneros, sitio 22, para verificar un procedimiento de violencia intrafamiliar.

Manifiesta que se trasladaron al lugar y una vez allí se entrevistaron con la señora Margarita Isabel Vega Fernández de 46 años de edad, chilena, casada y ésta les manifiesta que momentos antes habría llegado su cónyuge, del cual se encontraba separada hacía un tiempo de palabra y le manifiesta que él, don José Rafael Yáñez Rojas, de 46 años de edad, habría llegado ebrio bajo los efectos de las drogas y sin mediar ninguna provocación de su parte habría procedido a amenazarla de muerte, manifestándole textualmente “te voy a matar maraca culiá y a la niña, voy a buscar la escopeta y vuelvo” y que se retira del lugar.

Señala que “la mujer”, por el miedo se decide a llamar al 133 y denuncia los hechos.

Con esos hechos denunciados por la víctima y como el campamento en un lugar rural efectuaron un patrullaje preventivo por el sector y al llegar frente al sitio número 20 aproximadamente, se percataron de la presencia de un individuo que estaba en la vía pública manipulando un arma de fuego, una escopeta específicamente, tipo artesanal que a simple vista se veía porque era dorada compuesta por dos cañones cilíndricos y procede en forma inmediata a la detención.

Señala que él efectúa la incautación del arma, una revisión de sus bolsillos y que en el bolsillo derecho del pantalón le encuentra 3 cartuchos de escopeta calibre 12 color azul. Seguidamente procede a su identificación y el sujeto le señala que se llama José Rafael Yáñez Rojas y se percata que es el mismo sujeto que había sido denunciado.

Procede a la detención, incauta el armamento, lo trasladan primeramente al Consultorio Silva Henríquez, porque tenía una lesión en su mano y posteriormente, a la unidad donde procede a confeccionar la documentación y toma contacto con el Fiscal.

Le señala al fiscal que, al arma incautada se le hizo un primer peritaje a simple vista, para ver si estaba en condiciones de ser usada y que a simple vista se veía que sí. Igualmente se hizo un set fotográfico del armamento, un acta de incautación y una cadena de custodia para remitirla donde instruyó la Fiscalía

Señala que en el detalle de la cadena de custodia se describe la fecha, el armamento que mantenía el imputado en ambas manos, se describe que es una escopeta artesanal compuesta por dos cañones cilíndricos y que en uno de ellos mantiene en el fondo una aguja percutora, igualmente que no tiene una marca, no tiene una serie y el color oro y 3 cartuchos que mantenía el detenido color azul calibre 12 en buenas condiciones. Señala que fue remitida con la serie 3288137 y no está seguro, pero le parece que fue remitida con el oficio número 36, que todo esto fue remitido a LABOCAR para el peritaje técnico y ver si estaba en

condiciones de ser disparada. Refiere que todo este procedimiento lo realizó prestando servicios en la 66° Comisaría de Bajos de Mena.

Explica que el comunicado de CENCO lo recibieron alrededor de las 18:50 hrs. aproximadamente y que ellos estaban muy cerca del lugar por lo que llegaron alrededor de 5 minutos después, aproximadamente a las 18:55 hrs. y que a esa hora se entrevistan con la víctima y ésta les relata la denuncia que hizo de las amenazas de su cónyuge.

Señala que el sujeto fue detenido frente al sitio 20 del campamento Los Areneros de la comuna de Puente Alto, en la vía pública.

Expresa que la identidad de don José Yáñez Rojas fue determinada en primer lugar porque el imputado les dio sus datos lo que se corroboró por el sistema Sim Card y luego lo vieron por la base de datos del Registro Civil.

Señala que se realizó set fotográfico y acta de incautación al armamento y las municiones.

El Fiscal procede a incorporar, mediante la exhibición al testigo una fotografía del set compuesto por 5 fotografías que se encuentra signado con el N° 4 del ítem “Prueba Material y Otros Medios Probatorios” del Auto de Apertura. El fiscal refiere que es la fotografía N° 1 del set allí ofrecido.

Ante esta exhibición señala el testigo que la fotografía que se le muestra corresponde a la de la escopeta que él incautó que es una escopeta compuesta de 2 cañones de color dorado y que en la parte superior de la fotografía se ven los 3 cartuchos color azul marca Tek calibre 12 y que esto fue lo que le incautó al detenido José Rafael Yáñez Rojas.

Señala al fiscal que tiene en la institución de Carabineros 30 años de servicio y en la 66° Comisaría se encuentra desde el año 2016, por lo que va a cumplir 5 años desde que se creó la 66° Comisaría.

Contra interrogado por la defensa señala que no se reunió con el fiscal para preparar el juicio y que si recibió el parte de Carabineros para hacer lectura y memoria de este juicio. Señala que el día de los hechos se movilizaba en el RP 5084, si no se equivoca en el número y le refiere a la defensa que no tiene ningún documento que le esté sirviendo de ayudamemoria.

Refiere que la víctima, por lo que él recuerda, al entrevistarla estaba muy afectada, porque le manifiesta que hacía dos meses se había separado de palabra del acusado por la constante violencia intrafamiliar de la que era víctima y que ella ya lo había denunciado producto de que el imputado ya estaba consumiendo mucho alcohol y droga por lo que ella decide separarse y hacer la denuncia que tenía por violencia intrafamiliar. Responde que no se le hizo alcoholemia al imputado el día que se le hizo la detención.

Señala que por lo que él recuerda la víctima le señaló que estaba sola con su hija, una niña menor de edad.

También señala que al incautarle el armamento al imputado no había nadie más en la calle, que estaban en la vía pública, que se trata de un campamento rural y que no recuerda haber visto a nadie más.

Agrega que este campamento se encuentra en Concha y Toro al llegar al río Maipo, en una calle que se llama Camilo Mate y al fondo, donde se encontraba el antiguo aparcadero municipal, comienza el campamento que es un lugar rural con pocas casas donde hay hartos árboles, que se trata de casas de madera muy rural y no hay muchas casas alrededor del lugar donde lo detuvieron.

Refiere que cuando ellos le tomaron la denuncia a la víctima ella no les manifestó que se hubiesen ocasionado daños y que él no concurrió el mismo día por otra denuncia al domicilio de la víctima que le parece que fue personal de San Jerónimo pero que él no concurrió a otra denuncia previa.

A continuación, declaró el funcionario de Carabineros **MARCELO ANTONIO MELIPIL VARGAS**, quien legalmente juramentado señala **al fiscal** que el día 14 de enero del año 2020 se encontraba de servicio primer patrullaje en la población en el vehículo policial RP 5084 que iba como jefe de patrulla el sargento primero José Aravena y como acompañante el carabinero Christopher Namoncura y que él iba como conductor.

Señala que aproximadamente a las 18:50 hrs. recepcionan un comunicado vía radial de la central de comunicaciones CENCO para que se trasladaran al campamento Los Areneros, sitio número 22.

Refiere que se trasladaron rápidamente al lugar ya que se estaba gestando un procedimiento de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar.

Explica al llegar al lugar se entrevistaron con la víctima quien le señaló que alrededor de las 18:45 hrs. habría concurrido su cónyuge, del cual se encontraba “separada de palabra”, bajo la influencia del alcohol y droga y le manifestó verbalmente “te voy a matar maraca culiá y a la niña, voy a buscar la escopeta y vuelvo” ante esa situación por los pocos minutos que habían transcurrido, efectuaron un patrullaje por el lugar y frente al sitio número 20 del mismo campamento y en la misma calle se percataron de un sujeto de aproximadamente 45 años de edad que manipulaba una escopeta de color dorado de tamaño similar al de una escopeta normal, por ello descendieron del vehículo policial y procedieron a su detención e incautación del arma que manipulaba el sujeto.

Expresa que, posteriormente es individualizado el sujeto como José Yáñez Rojas, que era el denunciado por la víctima de violencia intrafamiliar por la que habían asistido al lugar, por ello se le ingresa al vehículo policial y se traslada al consultorio Raúl Silva Henríquez para constatar lesiones y después a la unidad para el procedimiento de rigor.

Responde al fiscal que este procedimiento fue adoptado bajo la 66° Comisaría de Bajos de Mena y le señala que cuando dice que llegaron frente al sitio 20 se refiere al sitio 20 del campamento Los Areneros de la comuna de Puente Alto.

Le señala al fiscal que la identidad del imputado se confirmó por biométrico y luego por Cross Match en la unidad policial.

Agrega que, además de la escopeta color dorado el sargento Aravena efectuó una revisión superficial de las vestimentas del imputado y en el bolsillo derecho del pantalón éste mantenía 3 cartuchos color azul, calibre 12 de escopeta.

Señala que la víctima que denunció las amenazas se llamaba Margarita Vega y que era la cónyuge del imputado.

Agrega que el arma de fuego incautada y las municiones fueron remitidas al LABOCAR, mediante el oficio número 36 con la cadena de custodia 3288137.

Responde que lleva 5 años en Carabineros de Chile, que en la 66° Comisaría se desempeñó 3 años y actualmente se encuentra en la 20° Comisaría de Puente Alto.

Contra interrogado por la defensa señala que él no acudió por otra denuncia durante el día a la casa de la señora Margarita que sólo adoptó el procedimiento al cual se refirió.

Señala que se le hizo envío del parte policial mediante correo electrónico por parte de la fiscalía.

Refiere que lleva 5 años de servicio, que hizo un año de escuela y que lleva 4 años de servicio en la población y que al momento de tomar el procedimiento llevaba alrededor de 3 años de servicio sin contar el año de escuela, ya que salió el año 2017 del curso de formación.

Posteriormente presta declaración el funcionario de carabineros **FREDY ANTONIO OPAZO DIAZ**, quien legalmente juramentado **le refiere al fiscal** que el día 23 de septiembre del año 2019 mientras se encontraba de turno en la población concurrió a la calle Claudio Matte, sitio número 12 del sector del Campamento Los Areneros en la comuna de Puente Alto. Refiere que ese día concurrió por un procedimiento de violencia intrafamiliar en el que se entrevistó con doña Margarita Vega Fernández y ella le manifestó que ese mismo día aproximadamente a las 20:45 hrs. en circunstancias que se encontraba en su casa, en su domicilio particular que es donde él concurrió, junto a su hija de 6 años Josefa, llegó al domicilio su pareja de nombre José Yáñez Rojas, el cual desde que entró al domicilio entró en actitud hostil y le manifestó a viva voz que “la iba a matar concha de tu madre a vos y a la hija que tenemos” y que acto seguido comenzó a romper especies dentro del domicilio y desde sus vestimentas extrae un armamento tipo pistola que la víctima desconoce si es de verdad o a fogueo.

Señala que la víctima luego le relata que junto a su hija logran huir del domicilio y solicitan ayuda llamando a personal de Carabineros.

Expresa que estos hechos ocurrieron en el año 2019 mientras él se desempeñaba en la Subcomisaría de San Jerónimo y que él lleva 16 años como Carabinero de Chile.

Contra interrogado por la defensa señala que el domicilio al cual concurrió es el sitio número 12 de la calle Claudio Matte en el sector del Campamento Los Areneros y recuerda que ese día solamente estaba la hija, de 6 años una menor, junto a la víctima y no recuerda a nadie más.

Expresa que no recuerda si la víctima le dijo si había o no realizado denuncias anteriores y que la víctima no le describió el arma que el imputado habría sacado de entre sus ropas.

Finalmente se escuchó a **GUSTAVO ADOLFO MARDONES SILVA**, perito armero del Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile, quien legalmente juramentado manifestó al Tribunal que conforme al requerimiento se confeccionó informe pericial balístico armas número 417-2020, el cual mantiene como elementos ofrecidos una escopeta de fabricación artesanal adaptada al calibre 12 junto a 3 cartuchos balísticos calibre 12, evidencia contenida en el NUE 3288137.

Refiere que efectuado el estudio y análisis de las evidencias antes descritas se pudo establecer que el arma periciada correspondía a un arma de fuego de tipo escopeta de fabricación artesanal compuesta por dos tubos metálicos con forma y características de tubo cañón y cuerpo, provista de una empuñadura.

Señala que su funcionamiento mecánico depende de la inserción manual de un cartucho balístico de calibre 12 al interior de la recámara interna que mantiene

el tubo cañón y al efectuar la fuerza en direcciones contrarias de ambos tubos se produce el choque del percutor de fabricación artesanal que mantiene esta arma con la cápsula iniciadora del cartucho balístico calibre 12 lo que da como resultado la activación de este cartucho balístico y su posterior disparo en una fracción de segundo muy rápida.

Explica que los cartuchos balísticos de calibre 12 corresponden a 3 cartuchos balísticos calibre 12 de marca Tek, de fabricación nacional, los que se encontraban exteriormente en buen estado de conservación y no presentaban señales de percusiones. Sus cápsulas iniciadoras eran compatibles con la escopeta de fabricación artesanal en estudio y se encontraban aptos para ser percutidos.

Manifiesta como conclusión que se pudo determinar que el arma periciada correspondía a un arma de fabricación artesanal de tipo escopeta compuesto por dos tubos cañón y cuerpo la que se encontraba apta para efectuar disparo.

Al fiscal le señaló que lleva trabajando en el Laboratorio de Criminalística oficialmente 3 años y va para el cuarto año. Que se desempeña como perito armero, su grado de sargento segundo armero artificiero, ya que para tener esa condición realizó un curso de armero artificiero por el transcurso de un año dictado por el Ejército de Chile con certificación y acreditado por el Ministerio de Educación. Señala que al mes realiza más de 20 pericias balísticas.

Se le exhibe al perito la imagen signada con el número 3 del ítem “Prueba material y Otros medios de prueba” del Auto de Apertura, y refiere que en esa imagen observa la escopeta de fabricación artesanal que pertenece al peritaje número 417-2020 con los 3 cartuchos balísticos calibre 12 de los cuales también hizo ya la descripción. Señala que esa escopeta de fabricación artesanal está compuesta por dos tubos metálicos con forma y características de tubo cañón y cuerpo y simula en su apariencia una escopeta de fabricación convencional con un tipo de funcionamiento de repetición que no lo es, ya que son solamente tubos fijados mediante soldadura los que dan la forma y característica o apariencia de una escopeta de ese funcionamiento, pero principalmente lo que se debe realizar para llevar a cabo el disparo es insertar un cartucho balístico de calibre 12 al interior del tubo cañón como se puede ver en la región superior posterior, donde está el rectángulo que simula ser una empuñadura, en la región superior hay una ventana de expulsión que se pueden visualizar en la imagen y es allí donde se inserta en forma manual el cartucho balístico calibre 12 y queda alojado en la recámara interior del tubo cañón y se efectúa la fuerza en dirección contraria produciendo el choque y activación del cartucho.

Señala que no recuerda la unidad policial de la cual provenía esa cadena de custodia.

Explica que esta arma que él perició es de un color amarillo o dorado, que mediante la aplicación de algún tipo de pintura se le dio esta coloración al arma y que los cartuchos son de color azul.

A la defensa señala que se utilizaron los cartuchos para probar el arma de fuego. Que se hizo la prueba de activación respecto de los 3 cartuchos en esta arma de fabricación artesanal correspondiente al peritaje 417-2020, los cuales tuvieron una óptima activación y percusión lanzando el taco plástico concentrador expulsor y la perdigonada al espacio.

Incorporó también el Ministerio Público prueba documental consistente en el **Oficio DGMN.DECAE (S) N° 6442/244/2020**, de fecha 21 de enero de 2020, de la Dirección General de Movilización Nacional, suscrito por el General de Brigada HUGO LO PRESTI ROJAS, Director General de Movilización Nacional, donde se indica que José Rafael Yáñez Rojas no registra armas inscritas en dicho servicio ni posee permiso de porte de aquellas. De la misma manera señala que la persona antes indicada no registra autorización de compra de municiones en dicha Dirección General

También incorporó mediante su lectura el **Certificado de Matrimonio** emitido por el registro Civil que da cuenta de vínculo de matrimonio entre José Rafael Yáñez Rojas y Margarita Isabel Vega Fernández, quienes contrajeron matrimonio con fecha 7 de marzo del año 2012, sin subinscripciones, y el **Certificado de nacimiento** de Josefa Saray Yáñez Vega emitido por el registro Civil donde se señala que sus padres son José Rafael Yáñez Rojas y doña Margarita Isabel Vega Fernández.

NOVENO: Información aportada por la prueba de la defensa. Que la información incorporada mediante la prueba rendida por la defensa del acusado puede resumirse del modo que sigue.

Primeramente, prestó declaración **TERESA DE JESÚS FUENTEALBA MESÍAS**, quien legalmente juramentada señala **a la interrogación de la defensa**, que viene el día de hoy como testigo porque sabe “las cosas que han pasado”, “por lo que se le acusa a don José Yáñez”.

Expresa que el día 14 de enero de 2020 estaba el acusado con su hija Alondra, que era su polola, y fueron a visitar a un amigo donde iban comer un asado, “en un sitio de más abajo”, entonces se quedaron allá y de repente “sube el caballero don José” y ella estaba barriendo el antejardín y pasa con su camioneta color gris y va al sitio de “más arriba” y le dice “la señora de él que se llama Margarita y que vive o tiene unos amigos ahí, pero ahí estaba ella”, le dice “oye porque me fuiste a hacer tira la camioneta” y “ella le dijo que se la hacía tira porque no le ha dado plata a su hija”.

Señala que se escuchaba lo que hablaban porque los sitios son abiertos, que se oía muy fuerte la voz de los dos. Recuerda que esta discusión ocurrió como a las 18:00 hrs. Señala que “ella le dijo a él que va a llamar Carabineros y él le dijo que ¿porqué? y ella le dijo “porque le fue a hacer un escándalo” y él le dijo, “pero si me hiciste tira la camioneta me hiciste tira los vidrios y más encima me agrediste, me hiciste tira un vidrio, me partiste la cabeza”, entonces todos empezaron a salir afuera y después de como media hora, “él se vino desde la casa de la señora a mi casa y él venía ensangrentado” y la testigo le preguntó sobre qué le había pasado y lo hizo entrar a su casa donde lo trató de curar.

Refiere que luego de un rato golpean la puerta de su casa diciendo afuera “ahí está, sí ahí se metió, ahí está”, entonces la testigo señala que el imputado decía “abran no más” y ella abrió y preguntó qué pasaba y le dijeron que eran carabineros y que venían a buscar al imputado porque “está agrediendo a la señora” y la testigo les dijo “que no, que ahí no se llegaba y pasaba que ahí se tenía que presentar una orden para pasar y ellos le dijeron que no, que podían entrar así nada más y llegaron y entraron a su casa”.

Agrega la testigo que les habría dicho dónde estaba el imputado y que éste le habría dicho “no se preocupe, déjelos no más”, que él se “entregaba solo”.

Señala que ella le habría referido al imputado que “tenía que decir lo que había pasado, que le habían hecho tira la camioneta”. Explica que Carabineros comenzó a revisar su casa porque ellos decían que él andaba con un arma. Señala entonces, que ella les dijo que él no tenía ningún arma y que revisaran.

Agrega que luego el acusado puso las manos adelante y salió de su casa.

Señala que Carabineros revisó la camioneta y que no encontraron nada y que al imputado se lo llevaron detenido.

Expresa la testigo que ella presenció cuando carabineros revisó la camioneta y que había alrededor de 3 carabineros y que no encontraron nada.

Señala que a ella “la pasaron a llevar” porque no llevaban ninguna orden para poder entrar a su casa y debían tener orden y no llegar y pasar y que por eso ella está declarando, para defender al acusado porque no estaba haciendo nada, sólo estaba reclamando lo que le habían hecho a él.

Posteriormente, continúa señalando que luego le dijo la hermana que el imputado había quedado detenido “por un arma” y la testigo refiere que “él nunca tuvo un arma que ella estuvo ahí presente cuando se lo llevaron detenido le pusieron las esposas y no salió con nada”, agrega que incluso revisaron su casa.

Señala que luego su hija le comentó que fueron a apedrear la casa y que ella estaba ahí que tuvo que esconderse porque le iban a pegar a ella. Relata que “esa familia agarró a pedrazo a toda esa gente” y aclara que cuando dice esa familia se refiere a la señora del imputado y que ellos fueron a hacer tira la camioneta del acusado y que su hija estaba ahí y que la podrían haber agredido.

Le reitera a la defensa que ella no vio ningún arma de fuego y que el acusado “no andaba con nada” que es una acusación falsa que no entiende por qué la hicieron y que ella vio cuando los sacaron de su casa y lo subieron al carro y se lo llevaron, que ella presenció todo.

El **Ministerio público** señala que no tiene preguntas para la testigo

A continuación, prestó declaración **CLARA AURORA PAVÉZ ROJAS**, quien legalmente juramentada señala **a la interrogación de la defensa** que conoce al acusado porque él le arrienda un sitio donde vive, eso es en Salvador Allende 081.

Agrega que conocía a la cónyuge del imputado porque cuando arrendó el contrato se hizo a su nombre.

Refiere que al principio todo era “normal”, pero luego ella “se dio a conocer como era”, el primer problema que tuvo fue que el hermano de la testigo tiene taxis y lo usaban los “vecinos”, como ella llama al acusado y su cónyuge, y su hermano en una oportunidad llevó a la cónyuge del imputado al banco a hacer un cobro y “la vecina” lo acusó de robo de ese dinero a su hermano. Señala que luego el “vecino” se dio cuenta que su cónyuge había sacado el dinero.

Señala que ella era en general “muy conflictiva”.

Sabe que el acusado está detenido desde el 14 de enero de 2020.

Señala que ese día ella lo vio trabajando a él, pero luego en la tarde se enteró por Carabineros de lo ocurrido y que el hermano de su vecino puso un candado y ella fue a averiguar qué pasaba. Al llegar vio que en el lugar estaba la esposa del acusado y que ella le dijo que “lo iba a hundir en la cárcel”.

Refiere que ella le pidió, entonces que se fuera del lugar porque ella con su vecino ya no eran pareja y “el trato” era con su vecino, a lo que la cónyuge le respondió que “no, porque ella era la esposa” y que no se iba a ir.

Relata que se quedó ahí con más gente. Señala que estuvo ahí hasta el 20 de febrero y no le pago los gastos básicos y se llevó todo del sitio, no dejó nada.

Agrega que “ella le pegaba” al acusado.

Reitera que la cónyuge del acusado le dijo que “lo iba a hundir en la cárcel”.

Señala que la cónyuge quería que le arrendara el terreno, pero ella no se lo quiso arrendar.

Luego el 20 de febrero en la noche fue al sitio que le arrendaba con su hijo porque tenía a otra persona en el sitio y le debía luz y agua y su hijo le pidió las llaves a “la vecina” y “amenazó con carabineros” y le dieron las llaves a su hijo y se fue.

Refiere que “ella era muy mal vividora y siempre le pegaba al vecino”.

Expresa que su vecino “era muy buena persona, ayudaba a la gente de la población, nada que decir de él”.

El Ministerio Público no tiene preguntas para la testigo.

A continuación, procedió la defensa a incorporar prueba documental. En primer lugar, incorporó **Acta de audiencia de fecha 10 de diciembre de 2020** seguida en contra de Margarita Isabel Vega Fernández, rit 14986-2019 del Juzgado de Garantía de Puente Alto, donde consta que se decretó una suspensión condicional del procedimiento por el término de 1 año, quedando afecta a la condición de la letra g) del artículo 238 del CPP, esto es fijar domicilio e informar cualquier cambio al Ministerio Público y la condición del artículo 9 letra b) de la ley 20.066.

De la misma manera procedió a incorporar **Solicitud de audiencia** enviada por el señor Fiscal don Luis Pérez Letelier en causa rit 14986-2019 del Juzgado de Garantía de Puente Alto en contra de Margarita Isabel Vega Fernández para formalizar a la imputada por el delito de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar en contra de la víctima José Rafael Yáñez Rosas.

DECIMO. Alegatos clausura. En la clausura señala el **Ministerio Público** que se ha logrado acreditar más allá de toda duda razonable los hechos materia de la acusación y participación culpable que le cabe al acusado en estos. En este sentido el Ministerio público señala que vino a juicio oral porque la propia víctima le dijo que quería ir a juicio por el temor, por el miedo que siente hacia el imputado y de esta manera es que este fiscal consideró razonable hacerlo. De esta forma la víctima ha sido bastante clara al señalar los hechos de amenazas que ha sufrido por parte de este imputado tanto los del 23 de septiembre del año 2019 como los ocurridos el año 2020, siendo precisa respecto de los días, las amenazas, por qué le tiene miedo a diputado y porque ella siente que efectivamente son amenazas de carácter serio y verosímiles. Además, también fue clara respecto de los daños que realizó el año 2020 el imputado en su portón.

Así también los funcionarios aprehensores principales fueron bastante claros en tomar la denuncia del año 2020 por amenaza, la tomaron, escucharon lo que le dijo la víctima y con la información proporcionada por esta van a los alrededores del lugar donde ocurrieron las amenazas en el campamento Los Areneros en la comuna de Puente Alto y en la vía pública, son concordantes en

señalar, que observan al imputado con una escopeta en su poder manipulándola, por lo que actúan en conformidad a la flagrancia y por lo tanto proceden a la detención del imputado que es el mismo que está presente el día de hoy. Señala que los funcionarios fueron claros en señalar la forma en que se corroboró la identidad del imputado, así como también fueron claros los señores Aravena y Melipil en cuanto a la NUE de lo incautado. En este sentido es la misma NUE que concuerda con la que señaló el señor perito y que concuerda con las mismas características del arma de fuego incautada, está escopeta tipo hechiza color dorado con además las 3 municiones de color azul. Así se puede dar fe y corroborar que lo efectivamente incautado, que mantenía el imputado en su poder, corresponde a lo efectivamente periciado expuesto por el señor perito y esto se corrobora además por las declaraciones ya señaladas y por la NUE y las fotografías expuestas.

De la misma forma la declaración del señor Freddy Opazo le da potencia y fuerza a la denuncia que había realizado el año 2019 la víctima por las amenazas ocurridas en septiembre y de esta forma también con la prueba documental expuesta se da cuenta del vínculo que une a la víctima y el imputado y el informe de la DGMN que señala que el imputado no tiene ningún tipo de permiso de esa entidad y que por lo mismo entonces las amenazas tenían este carácter de verosimilitud en atención a que el imputado señala que iba a buscar una escopeta y luego los funcionarios lo encuentran con la escopeta.

Es por todo ello que estima que se ha logrado acreditar más allá de esto duda razonable los hechos materia de la acusación y la participación culpable que le corresponde al imputado en los mismos

En su ***alegato de clausura la defensa*** señala que se ha convencido que el acusado es absolutamente inocente de los hechos que se le han imputado, que la sola declaración para acreditar el hecho del 23 de septiembre del 2019 de un funcionario policial no es suficiente.

Refiere que no se ha podido acreditar la participación de su representado en los hechos ocurridos el 23 de septiembre del año 2019 en relación con haber amenazado a la señora Margarita Vega Fernández. Señala que el hecho de que ella nunca tuviese testigos cada vez que hacía un denunció, a la defensa no le hace sentido y que existiera un temor tan grande por parte de ella de que vinieran a declarar testigos que dieran fe de lo que ella estaba diciendo, a la defensa le parece bastante extraño.

Que, además, los hechos acontecidos el 14 de enero del 2020 tampoco para la defensa son tan claros y contundentes en cuanto a la información entregada por la víctima en el Tribunal. No le parece que sea creíble, es más señala que la defensa presentó prueba de que la violencia nacía más de ella que del imputado y para ello ha presentado prueba documental que da cuenta de que se formalizó en algún momento del año 2020 a la señora Margarita por violencia hacia el acusado.

Refiere que y si bien es cierto, los funcionarios aprehensores el 14 de enero del año 2020 dicen haber detenido al imputado con un arma de fuego, y es muy difícil para la defensa señalar que no son creíbles, porque obviamente son las personas de confianza y nuestros protectores, pero para la defensa el hecho de que la señora Teresa haya declarado en juicio señalando que observó la detención y que manifiesta que lo sacan de su casa y que observó la revisión del

acusado y del vehículo y que éste nunca tuvo un arma de fuego, si le hace sentido a la defensa.

Agrega que le parece extraña la forma de llevar adelante esta investigación y le parece muy extraño que los funcionarios policiales se hayan sabido casi de memoria lo que había ocurrido ese día ya que han referido que se les mandó el parte policial para dar cuenta en este juicio por parte del Ministerio Público, si bien es cierto es un procedimiento que ellos tomaron, pero para la defensa no es creíble cuando hay un testigo que observa la dinámica de la detención, que observa cuando lo sacan de su casa y que no tenía ningún tipo de arma de fuego en sus manos.

Señala que su representado no tiene causas anteriores a esta que pueda decir que ha estado involucrado en hechos de similares características, sino que ha quedado demostrado la violencia expresada más por su cónyuge que por la del acusado.

Por ello insiste en la inocencia del acusado y que esto ha sido un abuso de terceras personas que lo han mantenido privado de libertad por más de 15 meses.

DECIMO PRIMERO: Palabras finales del acusado. El acusado ante la posibilidad que le entrega el Tribunal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, de decir lo que estime conveniente si así lo desea señala que siente lo que ha pasado, que él nunca le hizo daño a su cónyuge. Refiere que él ya estaba rehaciendo su vida con otra pareja y ella siempre llegaba con más gente y le revisaba si tenía otra mujer y él no podía vivir tranquilo, que estaba aburrido de todo. Que ese día estaba en un asado, nunca ha portado armas, que él es un trabajador y ella lo esperaba al término de su trabajo.

Agrega que nunca le haría daño a su hija, que la ama, le mandaba a dejar dinero, pero ya no quería estar con su esposa y ella no se quería separar de él, lo está calumniando. Que él estaba en casa de la señora Teresa y Carabineros lo sacó de ahí, pero nunca ha tenido ningún arma.

Finalmente señala que tiene un dolor muy grande.

DECIMO SEGUNDO: Decisión del tribunal. Que, después de haber concluido el debate de rigor, de conformidad con lo previsto en los artículos 339 y 340 del Código Procesal Penal, el Tribunal deliberó ponderando las pruebas reunidas en la audiencia con arreglo a lo preceptuado en el artículo 297 del cuerpo legal citado, y tomó, por unanimidad, la decisión de absolver al acusado respecto de los hechos signados como Hecho N° 1 y Hecho N° 2 en la acusación fiscal. A su vez, de la misma manera, decidió condenar al acusado por el hecho signado como Hecho N° 3 contenido en la acusación fiscal.

DECIMO TERCERO: Valoración de la prueba y razones jurídicas que fundamentan la decisión de absolución respecto de los hechos N° 1 y N° 2 de la acusación. Los medios de prueba incorporados tanto por el Ministerio Público como por la defensa se valoraron de acuerdo con lo prescrito en el artículo 297 del código Procesal Penal, y permitió llegar a las conclusiones siguientes:

I.- En cuanto al delito de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, acaecido el 23 de septiembre de 2019 en perjuicio de Margarita Vega Fernández, contenido en el Hecho N° 1 de la acusación.

Que, para acreditar este hecho, el Ministerio Público contó, en primer lugar, con la declaración de Margarita Isabel Vega Fernández, víctima de este.

En cuanto a la declaración prestada por la víctima, en general, sus dichos permitieron a estos jueces tenerla como una testigo creíble y verosímil, toda vez que se encontraba ubicada en tiempo y espacio, que se refirió a cada uno de los hechos de la acusación, expresando día, lugar y hora, entregando detalles, fue clara, coherente, precisa y dio razón de sus dichos. Todo lo que lleva a valorar su testimonio positivamente y permitirá fundar efectivamente alguno de los hechos materia de la acusación. Sobre este hecho en particular refirió que efectivamente el día 23 de septiembre de 2019, alrededor de las 20:45 hrs habría concurrido hasta su domicilio en el sitio 22 del campamento Los Areneros de la comuna de Puente Alto, su cónyuge y pateando la puerta habría ingresado, la habría insultado a ella y a su hija y las habría amenazado de muerte, sin embargo respecto de este hecho no existe ningún otro antecedente objetivo que permita hacer aplicación del principio de corroboración en cuanto a los dichos de la víctima, como será analizado más adelante.

También contó el Ministerio Público con la declaración del funcionario de Carabineros, **Fredy Antonio Opazo Díaz**, quien, atendido su carácter de funcionario público, relató su participación en el procedimiento de esta denuncia y resultó creíble respecto de lo que señaló en estrados, siendo objetivo e imparcial, pero en su testimonio solo da cuenta de que tomó declaración a la víctima de esta causa, sin aportar ningún antecedente más que permitiera algún tipo de corroboración respecto de la declaración de esta y de los elementos requeridos por el tipo penal de que se trata. En efecto se limitó a señalar que el día 23 de febrero de 2019, estando de turno en la población concurrió por un procedimiento de Violencia Intrafamiliar hasta el campamento Los Areneros, sitio 12, en la comuna de Puente Alto, donde habría recibido la denuncia de la víctima, en los mismos términos por la víctima ya relatados.

Es importante señalar que si bien en este tipo de ilícitos, como ya lo ha señalado la doctrina y jurisprudencia ampliamente, la declaración de la víctima aparece como el elemento probatorio más fuerte en el establecimiento de los hechos, resulta por si solo insuficiente para tales fines, y se hace necesario el que pueda ser constatada con la concurrencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo que avalen lo que fue declarado por la víctima.

La declaración del funcionario que llega con posterioridad a la ocurrencia del hecho y se limita a relatar únicamente lo que le señaló la víctima, sin aportar otro antecedente, no permite formar convicción en cuanto a la exteriorización de las supuestas amenazas del imputado a la víctima y mucho menos respecto de si ellas hubieran revestido o no algún grado de seriedad y verosimilitud. En este sentido se debe tener en consideración que, en este caso concreto, el funcionario que declara no refiere mayores detalles de la denuncia, ni de la hora en que llegó al lugar de los hechos, ni de lo que pudo haber percibido por sus propios sentidos sobre el estado emocional en el cual se encontraba la víctima al tomar su declaración, o si había más personas en el lugar, ya sea dentro o fuera de la vivienda. Sus declaraciones fueron generales, incluso errando en el número de

sitio al cual concurrió al procedimiento, ya que refirió en dos oportunidades que era el sitio N° 12, no el N° 22. Tampoco refiere la realización de alguna diligencia en el momento, ya sea tendiente a buscar testigos que pudieran haber escuchado algo y de esa manera descartar o comprometer la ocurrencia de los hechos o diligencias tendientes a ubicar al imputado, máxime cuando se le había señalado que se trataba de amenazas de muerte que eran también respecto de una menor de edad de 6 años y habrían ocurrido teniendo el imputado en su poder un arma de fuego.

De acuerdo con todo lo referido, lo que se le está pidiendo al Tribunal es hacer un juicio sobre una versión de los hechos sin corroboración en algún otro elemento objetivo, lo que escapa a cualquier operación intelectual destinada a formar convicción sobre la verdad de estos.

Por todo lo razonado, es que el Tribunal no pudo tener por acreditada la ocurrencia de este hecho y consecuentemente la participación en ellos del acusado.

II.- En cuanto al delito de daños simples, acaecido el 14 de enero de 2020 en perjuicio de Margarita Vega Fernández, contenido en el Hecho N° 2 de la acusación.

En relación con este delito de daños, sólo se ha presentado como medio de prueba para acreditar la existencia de este la declaración de la víctima, que ya fue valorada en el N° I.- anterior, quien declara que el 14 de enero de 2020, en su casa ubicada en el campamento Los Areneros sitio 22 de la Comuna de Puente Alto, sin señalar horario en que esto habría ocurrido, además de amenazarla, el acusado “le tiró la camioneta sobre su portón” porque ella no lo habría dejado entrar, añadiendo que no sabe si le quiso “tirar la camioneta al portón o a ella”. Que producto de esta situación el portón se habría caído en su parte izquierda y que esos daños que tuvo el portón ella los avalúa en alrededor de 500.000 pesos, agregando que tuvo que contratar a alguien que se lo arreglara y que además el acusado le habría robado un equipo de música.

En este sentido, primeramente, la víctima señala que los daños se habrían ocasionado en un portón, específicamente en la parte izquierda del portón, y no en el cerco perimetral como lo refiere la acusación fiscal, lo que no fue aclarado en juicio.

Por otra parte señala la víctima que Carabineros habría sacado fotografías de los daños que habrían ocurrido el día 23 de septiembre de 2019, situación que no es materia de este juicio, ya que los daños a que se refiere este hecho N° 2 habrían ocurrido el 14 de enero de 2020, teniendo en consideración de todos modos, que aun cuando hubiere errado la víctima respecto del día de los daños que se sacaron las fotografías, producto de algún nerviosismo al momento de prestar declaración, tampoco se ha incorporado fotografía referente a daño alguno existente en un cerco perimetral, en un portón o en cualquier otro lugar.

En efecto nada se señala respecto de este hecho N° 2 por parte de ninguno de los funcionarios de carabineros que prestó declaración, ni siquiera por los funcionarios de carabineros que tomaron el procedimiento del mismo día 14 de enero de 2020, respecto del hecho 3.

Habría resultado de total utilidad para acreditar la existencia de ellos, que los funcionarios que tomaron el procedimiento hubiesen referido si observaron

algún daño, si al hablar con la víctima ésta les refirió y mostró el portón, el estado en que este se encontraba y cuál sería la razón. Obviamente habría resultado muy útil que se hubiere traído a estrados fotografías de cómo había quedado ese portón o se hubiera acompañado algún recibo o declaración respecto de su arreglo, algo que hubiera permitido que estos sentenciadores pudieran tener por acreditada la existencia de dichos daños, pero nada de eso ocurrió en juicio.

En este sentido ninguna otra probanza se ha acompañado para acreditar los supuestos daños ocurridos más que la declaración de la víctima y por tanto esta declaración no pudo ser apoyada y corroborada con algún otro medio de prueba que permitiese contar al tribunal con otro elemento distinto a su sola versión para llegar al esclarecimiento de los hechos.

La falta de información imparcial, que no provenga exclusivamente de la fuente de la denuncia, impide al tribunal establecer la ocurrencia del ilícito imputado y consecuentemente determinar una posible participación.

III.- Motivo de absolución respecto de los hechos N° 1 y N° 2. Que el artículo 340 del Código Procesal Penal, dispone que nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiere correspondido al imputado una participación culpable y penada por la ley.

Que atendido el elevado estándar de certeza que debe alcanzar el órgano jurisdiccional para dictar una sentencia condenatoria en nuestro ordenamiento jurídico, tal cual fluye del artículo recién transcrito, se hace necesario que el ente persecutor rinda pruebas cuyo contenido revista una alta calidad y congruencia entre ellos que permita realizar adecuadamente el ejercicio de corroboración por parte de estos sentenciadores y, de acuerdo a lo fundamentado en los números I.- y II.- de este mismo considerando, esto no ha ocurrido ya que las probanzas de cargo fueron insuficientes para establecer los elementos de los tipos penales por los que se acusó, esto es el delito de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar contenido en el hecho N° 1 y el de daños simples contenido en el hecho N° 2, por lo que no habiéndose acreditado ninguno de los hechos materia del requerimiento presentado por parte del ministerio Público no se hace posible plantear una participación en los mismos por parte del imputado y no cabe otra posibilidad para estos jueces más que la absolución, como se dirá en lo resolutive de este fallo.

DECIMO CUARTO: Decisión condenatoria. Valoración de la prueba que fundamenta la decisión. Hecho acreditado. Calificación jurídica, grado de desarrollo y participación. Que este Tribunal, tal como señaló en el veredicto tuvo por acreditado el siguiente hecho:

“El día 14 de enero del año 2020, en horas de la tarde, aproximadamente a las 18:45 horas, en el domicilio de campamento Los Areneros N° 22 comuna de Puente Alto, el imputado JOSÉ RAFAEL YÁÑEZ ROJAS amenazó de forma seria y verosímil a su cónyuge Margarita Vega Fernández, con quien tiene una hija en común, señalándole: “te voy a matar maraca culiá y a la niña, voy a buscar una escopeta y vuelvo”.

Posteriormente ese mismo día, momentos después, funcionarios de carabineros sorprendieron en la vía pública, en el sector frente al sitio 20 de campamento Los Areneros, comuna de Puente Alto, al imputado JOSÉ RAFAEL YÁÑEZ ROJAS, manteniendo en su poder sin contar con autorizaciones competentes, un arma de fuego, tipo escopeta artesanal, y tres cartuchos de escopeta color azul, calibre 12, marca Tek.”

Que a juicio del Tribunal el hecho precedentemente descrito es constitutivo de los **delitos consumados** de **Amenazas en contexto de Violencia Intrafamiliar**, previsto y sancionado en el artículo 296 N° 3 del Código Penal en relación con el artículo 5 de la ley 20.066 y de **Porte de arma de fuego prohibida**, previsto y sancionado en el inciso primero del artículo 14, en relación al inciso 3° del artículo 3° de la Ley 17.798, desde que se logró acreditar, más allá de toda duda razonable, la concurrencia de todos y cada uno de los elementos de los tipos penales.

Para arribar a estas conclusiones, la prueba incorporada en este juicio se valoró, de acuerdo con lo previsto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, y se fue razonando de la siguiente manera:

1.- En cuanto al delito de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar previsto y sancionado en el artículo 296 N° 3 del Código Penal en relación con el artículo 5 de la ley 20.066. Para acreditar los hechos constitutivos de este delito, contenidos en la primera parte del hecho acreditado, se contó fundamentalmente con la declaración de la víctima **Margarita Isabel Vega Fernández**, y tal como ya se refirió con anterioridad, esta testigo fue valorada por estos jueces, como una testigo creíble, toda vez que se encontraba ubicada en tiempo y espacio, se refirió a este hecho de la acusación, expresando día, lugar y hora, entregando detalles de lo ocurrido y dio razón de sus dichos. Todo lo que lleva a valorar su testimonio positivamente.

Respecto de la declaración de la víctima en relación a este hecho N° 3, resulta necesario señalar que si se cuenta con un **dato periférico de carácter objetivo de corroboración del hecho denunciado por aquella**, que permite refrendar la verosimilitud de su testimonio, cual es justamente el hecho de que el imputado es encontrado por funcionarios de carabineros, momentos después de proferirle la amenaza de ir a buscar una escopeta para matarla a ella y a su hija, en los alrededores de su domicilio, portando una escopeta artesanal y 3 cartuchos calibre 12.

Por lo tanto, para acreditar el hecho N° 3, no solo se cuenta con la declaración de la víctima y el testimonio de oídas de los funcionarios que toman la denuncia, sino que existe este dato objetivo de corroboración, que como se señaló dota de mayor certeza y da verosimilitud a la declaración de la víctima, y permite descartar que su declaración hubiese estado motivada por alguna ganancia secundaria, dándole mayor consistencia a sus dichos.

Con respecto a la fecha, hora y lugar de los hechos se acreditan con la declaración de la víctima que refiere, que el día **14 de enero de 2020**, al volver de realizar unas compras a su domicilio ubicado en **Campamento Los Areneros, sitio N° 22, comuna de Puente Alto**, se encontró en el lugar con el acusado José Rafael Yáñez Rojas, quien es su cónyuge, y habría estado insultándola y molestándola todo el día, que el acusado estaba ebrio y drogado y que pasaba en su camioneta frente a su casa de un lado a otro gritándole garabatos y

amenazándola, hasta que **alrededor de las 18:45 hrs** de ese mismo día comenzó a amenazarla **diciéndole que la mataría a ella y a la hija que ambos tienen para lo cual iría a buscar una escopeta.**

Frente a estos últimos dichos la víctima decidió llamar a Carabineros, alrededor de las 18:45 hrs, **porque sintió mucho miedo**, el que justifica no solo en los dichos del acusado, sino que también en el conocimiento que ella señala tener de la forma de comportarse de su cónyuge, ya que refiere que es una persona a la que le gustan las armas, que sabía que él tenía armas y que siempre solucionaba las cosas como “mafioso”.

Corroboró lo dicho por la víctima las declaraciones de los **funcionarios policiales Aravena Torres y Melipil Vargas**, quienes ofrecieron sobrada razón de sus dichos y sus declaraciones resultaron consistentes, coherentes y concordantes, tanto entre ellos, como con el mérito que arrojó el resto de la prueba de cargo, impresionando a estos sentenciadores, como deponentes imparciales, claros, precisos y veraces.

Estos funcionarios, en este sentido refieren también que **el día 14 de enero del año 2020**, se encontraban de servicio de primer patrullaje, cuando recibieron un llamado de CENCO, alrededor de las 18:50 hrs, en el que se les informaba de un procedimiento que se estaba gestando de violencia intrafamiliar **en el Campamento Los Areneros, sitio 22 de la comuna de Puente Alto**. Ambos, de manera conteste, señalan que llegaron en alrededor de 5 minutos porque se encontraban muy cerca del lugar y se entrevistaron con la víctima Margarita Vega Fernández, quien les refiere los hechos y fundamentalmente les señala que **alrededor de las 18:45 hrs.** había sido amenazada de muerte ella y su hija por el acusado, habiéndole señalado éste, luego de insultarla que iría a buscar una escopeta para matarla a ella y a su hija.

Agregan ambos funcionarios que frente a esa denuncia y habiendo transcurrido solo unos pocos minutos desde la ocurrencia de ese hecho proceden a realizar un patrullaje por el lugar y que al llegar frente al sitio N° 20 del mismo campamento Los Areneros se percatan de la presencia de un sujeto que estaba en la vía pública manipulando un arma de fuego tipo escopeta lo que pudieron apreciar a la distancia porque el arma era de color dorado, por lo que bajaron del carro policial y procedieron a la incautación del arma y la detención de sujeto.

Señalan que le solicitan la identificación y el imputado les refiere que se llama José Rafael Yáñez Rojas, dándose cuenta en ese momento los funcionarios que se trataba del mismo sujeto que había denunciado la víctima del procedimiento de violencia intrafamiliar por el que habían acudido al lugar, posteriormente corroborando la identidad del acusado por biométrico y cross match en la unidad policial.

Con respecto a la seriedad y verosimilitud que tuvo la amenaza proferida para la víctima y que es exigida por el tipo penal, queda de manifiesto y se tiene por acreditada por los propios dichos de la víctima que señala que decidió llamar a carabineros cuando a ella “le entró el pánico” y sintió mucho miedo al amenazarla el acusado con buscar una escopeta para matarlas porque ella tenía conocimiento de que el acusado efectivamente tenía armas, lo que se ve corroborado con lo señalado por el funcionario Aravena Torres, quien refiere que la víctima se encontraba muy afectada y que le había señalado que tenía mucho miedo por lo que había decidido realizar la denuncia, es decir para la víctima era

absolutamente posible en atención al contexto y el conocimiento que tenía del acusado, que este fuera a realizar efectivamente el mal con el que la amenazó. De hecho, el haber llamado a carabineros y realizado la denuncia, con todo lo que ello conlleva, permite también entender que la víctima sintió que la amenaza que le profirió el acusado de que la iba a matar a ella y a su hija era real y que podía efectivamente llevarla a cabo, por lo que requirió ayuda llamando a carabineros. Ahora, desde el punto de vista objetivo, el hecho de haberse sorprendido al acusado portando un arma de fuego prohibida en la proximidad del domicilio de la afectada y luego de efectuada la denuncia son elementos que claramente denotan realidad y verosimilitud en la amenaza proferida.

Finalmente, **para acreditar el vínculo exigido por el artículo 5° de la ley 20.066** y establecer que estas amenazas se dieron en el contexto de Violencia intrafamiliar se incorporó al juicio por parte del ente persecutor como prueba documental el **Certificado de Nacimiento de Josefa Saray Yáñez Vega**, en el cual se refiere que sus padres son José Rafael Yáñez Rojas, cedula de Identidad N° 14.247.016-0 y su madre es Margarita Isabel Vega Fernández cédula nacional de identidad N° 12.353.374-7 y el **Certificado de Matrimonio entre víctima e imputado**. Estos se tratan de documentos oficiales y públicos, legalmente incorporados al juicio, no objetados por la defensa, por lo que fueron valorados positivamente y permitieron acreditar que víctima e imputado tienen una hija en común y además tienen la calidad de cónyuges desde el 7 de marzo del año 2012, por lo que efectivamente el vínculo exigido por la ley se tiene por acreditado.

Iter criminis. Que con las probanzas indicadas se acreditó en el juicio oral que ejecutó la totalidad de la conducta descrita en el tipo, por lo que el ilícito se encuentra en grado de desarrollo consumado.

Participación: Que, asimismo, con la prueba ya analizada, se pudo acreditar la participación culpable en este ilícito del acusado, en calidad de autor, en conformidad a lo previsto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal, por haber intervenido en la ejecución del ilícito de manera inmediata y directa.

2.- En cuanto al delito de Porte de Arma de Fuego Prohibida, previsto y sancionado en el inciso primero del artículo 14, en relación con el artículo 3° de la Ley 17.798. En el presente juicio es dable señalar que la acreditación de los hechos constitutivos de este delito, contenido en la segunda parte del hecho acreditado, fue posible, principalmente, por las declaraciones de de los **funcionarios de carabineros José Rodolfo Aravena Torres y Marcelo Antonio Melipil Vargas**, quienes señalan de manera conteste que día 14 de enero de 2020 alrededor de las 18:50 hrs reciben el comunicado de CENCO para dirigirse al campamento Los Areneros a verificar el procedimiento de Violencia intrafamiliar y que luego de tomar la declaración a la víctima proceden a realizar un patrullaje por el lugar y que al llegar frente al sitio N° 20 del mismo campamento Los Areneros se percatan de la presencia de un sujeto que estaba en la vía pública manipulando un arma de fuego tipo escopeta lo que pudieron apreciar a la distancia porque el arma era de color dorado, por lo que bajaron del carro policial y procedieron a la detención de sujeto e incautación del arma.

Agrega el funcionario Aravena Torres que el detiene al sujeto y le incauta el arma, procediendo a realizar la revisión superficial de sus vestimentas, encontrando en el bolsillo derecho de su pantalón 3 cartuchos de escopeta calibre

22 de color azul. Esto se ve corroborado por lo declarado por el funcionario Melipil Vargas quien señala que incautan el arma y es el sargento Aravena quien efectúa una revisión de las vestimentas del imputado y encuentra los tres cartuchos calibre 12 de escopeta.

Manifiestan que le solicitan la identificación y el imputado les señala que se llama José Rafael Yáñez Rojas, dándose cuenta de que se trataba del mismo sujeto que había denunciado la víctima del procedimiento de violencia intrafamiliar por el que habían acudido al lugar, posteriormente corroborando la identidad por biométrico y cross match en la unidad policial.

La naturaleza de los elementos encontrados en poder del encartado quedó establecida fundamentalmente con la prueba pericial, que fue complementada con la testimonial de los funcionarios policiales ya señalados y otros medios de prueba.

Así el perito armero artificiero Gustavo Mardones Silva, expuso brevemente que le correspondió confeccionó informe pericial balístico armas N° 417-2020. En su declaración, tal como se señaló en extenso en el considerando OCTAVO manifestó que dicha pericia mantiene como elementos ofrecidos una escopeta de fabricación artesanal adaptada al calibre 12 junto a 3 cartuchos balísticos calibre 12, evidencia contenida en el NUE 3288137.

Señala que se pudo establecer que el arma periciada correspondía a un arma de fuego de tipo escopeta de fabricación artesanal compuesta por dos tubos metálicos con forma y características de tubo cañón y cuerpo, provista de una empuñadura y que su funcionamiento mecánico depende de la inserción manual de un cartucho balístico de calibre 12 al interior de la recámara interna que mantiene el tubo cañón y al efectuar la fuerza en direcciones contrarias de ambos tubos se produce el choque del percutor de fabricación artesanal que mantiene esta arma con la cápsula iniciadora del cartucho balístico calibre 12 lo que da como resultado la activación de este cartucho balístico y su posterior disparo en una fracción de segundo muy rápida.

Explica que los cartuchos balísticos de calibre 12 corresponden a 3 cartuchos balísticos calibre 12 de marca Tek, de fabricación nacional, los que se encontraban exteriormente en buen estado de conservación y no presentaban señales de percusiones. Sus cápsulas iniciadoras eran compatibles con la escopeta de fabricación artesanal en estudio y se encontraban aptos para ser percutidos. Manifiesta como conclusión que se pudo determinar que el arma periciada correspondía a un arma de fabricación artesanal de tipo escopeta compuesto por dos tubos cañón y cuerpo la que se encontraba apta para efectuar disparo. También refiere que se hizo la prueba de activación respecto de los 3 cartuchos en esta arma de fabricación artesanal correspondiente al peritaje 417-2020, los cuales tuvieron una óptima activación y percusión lanzando el taco plástico concentrador expulsor y la perdigonada al espacio.

Igualmente, al exhibírsele la imagen signada con el número 3 del ítem “Prueba material y Otros medios de prueba” del Auto de Apertura, este refirió que en esa imagen observa la escopeta de fabricación artesanal que pertenece al peritaje número 417-2020 con los 3 cartuchos balísticos calibre 12 que le correspondió periciar.

Así, el Tribunal pudo conocer en forma precisa la naturaleza del arma y municiones incautadas al acusado, debidamente periciadas, realizándose

exhaustivas pruebas técnicas para constar su estado de conservación y de funcionamiento, de lo que dio cuenta acabada el perito.

Complementando lo ya reseñado el testigo Aravena Torres también describió en detalle el arma de fuego tipo escopeta, de fabricación artesanal y los 3 cartuchos, **refiriendo que los fijó fotográficamente y al serle exhibida la fotografía signada con el N° 4 de “Prueba Material y Otros medios de prueba” del Auto de apertura**, éste reconoció en la fotografía exhibida la escopeta que el incautó y que es compuesta de 2 cañones color dorado y 3 cartuchos color azul marca TEK calibre 12 y que correspondía a aquello que le incautó al acusado.

Resulta relevante hacer notar que los testigos Aravena y Melipil señalan que remiten los objetos incautados bajo la NUE 3288137, misma NUE a la que hace referencia el perito. Así se logra acreditar que aquello que le fue incautado al acusado fue lo mismo que fue periciado.

Finalmente, se incorporó el Ministerio Público prueba documental consistente en el **Oficio DGMN.DECAE (S) N° 6442/244/2020**, de fecha 21 de enero de 2020, de la Dirección General de Movilización Nacional, suscrito por el General de Brigada HUGO LO PRESTI ROJAS, Director General de Movilización Nacional, donde se indica que José Rafael Yáñez Rojas no registra armas inscritas en dicho servicio ni posee permiso de porte de aquellas. De la misma manera señala que la persona antes indicada no registra autorización de compra de municiones en dicha Dirección General. Atendida la naturaleza del arma incautada al acusado, esto es, un arma de fabricación artesanal apta para el disparo, inoficioso resulta valorar este documento en cuanto a esa circunstancia, atendido que dichos objetos constituyen elementos prohibidos por el legislador, de manera que en nada contribuye la circunstancia de carecer el acusado de permiso para porte o tenencia de armas de fuego, en circunstancias que dicha autorización sólo se refiere a armas sujetas a control de la autoridad. Sin embargo, si resulta útil su valoración en cuanto a que el acusado no posee autorización de compra de municiones. De esta manera respecto de este documento se señalará que cuenta con firma oficial y constituye antecedente que no fue objetado por la defensa penal del acusado, fue correctamente incorporado a juicio de conformidad al tenor del artículo 333 del Código Procesal Penal, razón por la cual esta magistratura lo estimó como documento válido que aportó información verificada y verosímil.

Iter criminis. Que con las probanzas indicadas se acreditó en el juicio oral que ejecutó la totalidad de la conducta descrita en el tipo, esto es portar un arma de fuego de fabricación artesanal, por lo que el ilícito se encuentra en grado de desarrollo consumado.

Participación: Que, asimismo, con la prueba ya analizada, se pudo acreditar la participación culpable en este ilícito del acusado, en calidad de autor, en conformidad a lo previsto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal, por haber intervenido en la ejecución del ilícito de manera inmediata y directa.

3.- En cuanto al delito de Porte o Tenencia ilegal de municiones imputado por el Ministerio Público en su acusación. Concurso aparente de leyes. Habiéndose acreditado que se portaba por parte del acusado un arma de fuego artesanal tipo escopeta adaptada al calibre 12 nos encontramos como señalamos recientemente ante el ilícito establecido en el artículo 14 en relación

con el artículo 3° de la ley 17.798, sobre control de armas, que sanciona a quienes porten armas de fabricación artesanal.

El Ministerio Público en su acusación señala que la segunda parte del hecho acreditado permitiría configurar dos ilícitos, por una parte, el Porte de arma prohibida y por otra el Porte o tenencia de municiones.

En este sentido el tribunal estima que en relación con los 3 cartuchos calibre 12 marca TEK que fueron incautados al acusado, *existe un concurso aparente de leyes penales, esto es, cuando un hecho parece satisfacer las exigencias de dos o más tipos diversos, pero, en definitiva, solo será regulado por uno de ellos, en tanto que los demás resultaran desplazados por causas biológicas o valorativas.* (Cury, Enrique, Derecho Penal, parte general, edición Universidad Católica, 2005, página 667 al 670)

Por consiguiente, a efectos de establecer el régimen penológico, debe acudirse a los principios que ha determinado la doctrina a efectos de dar solución a este tipo de concursos.

En el presente caso, estos sentenciadores estiman que lo que corresponde es dar aplicación al principio de consunción o de absorción, conforme al cual *“hay también un concurso aparente de leyes penales, y no un concurso ideal de delitos, cuando el hecho aparece ser captado por dos o más tipos; pero como el disvalor delictivo que implica la ejecución de uno de ellos contiene al que supone la realización del otro u otros, aquél consume o absorbe a éstos, desplazándolos”.* (Idem)

En el caso que nos ocupa, efectivamente nos encontramos con un hecho que parece enmarcarse en dos hipótesis distintas, esto es, en el artículo 14 en relación con el artículo 3° inciso 3° de la ley 17798 y en el inciso 2° del artículo 9 de la misma ley, los cuales contienen penalidades diversas. Sin embargo, se acreditó en este juicio que la escopeta artesanal está adaptada al calibre 12 y que los cartuchos tienen el mismo calibre, por lo tanto, dichos cartuchos están íntimamente relacionados con la escopeta artesanal. En definitiva, dichos cartuchos son esenciales para que el arma en que sean empleados posea poder destructivo, sin ellos carece en lo inmediato de ese poder. Debe atenderse al sentido y significación del hecho. El disvalor de la conducta de portar un arma prohibida dice relación con su potencial peligro, y ello comprende a las municiones o cartuchos que contiene, pues sin ellas, su potencial riesgo sería menor. Así el disvalor que implica el porte de la parte de un arma, prohibida contiene el disvalor de las municiones o cartucho que mantiene, así el primero contiene y absorbe al segundo, pudiendo en definitiva considerarse como elementos que aumentan la extensión del mal causado, afectando en mayor medida el bien jurídico de seguridad pública, debiendo ser consideradas para efectos de lo dispuesto en el artículo 17 B de la Ley 17.798, pero no como un delito diverso.

Es por ello que el Tribunal ha decidido que, en relación al delito de Porte o tenencia de municiones, considerado como un delito independiente procede absolver al acusado, ya que dicha figura será subsumida como se dijo en el delito de Porte de Arma Prohibida.

DECIMO QUINTO: Prueba de la defensa y su teoría del caso. Que, por su parte, la defensa rindió prueba propia, consistente básicamente en la declaración de los testigos Clara Aurora Pavez Rojas y Teresa de Jesús Fuentealba Mesias,

las cuales fueron reseñadas íntegramente en el considerando noveno de este fallo y en prueba documental consistente en la solicitud del Ministerio Público de audiencia para formalizar a Margarita Vega Fernández, como autora de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar en contra de su cónyuge, José Yañez Rojas y en el acta de audiencia en la cual se hace lugar a la suspensión condicional del procedimiento en favor de Margarita Vega Fernández por el ilícito referido.

Con respecto a la declaración de la testigo Clara Aurora Pavez Rojas, este Tribunal la desestimaré, ya que en nada aporta en relación con ninguno de los hechos materia de la acusación, toda vez que sus dichos se refieren fundamentalmente al comportamiento que habría tenido la cónyuge del acusado, a la cual durante toda su declaración no individualiza, refiriéndose a ella como “la vecina” o “la cónyuge” o “esposa”, en supuestos hechos ocurridos en fechas y lugares diversos a los referidos en la acusación y que nada tienen que ver con los mismos y que además no tienen ninguna corroboración.

Su declaración es vaga, general, no entrega datos concretos relacionados con los hechos de la acusación ni con ningún otro hecho que pudiese implicar una teoría alternativa a lo que se ha tenido por acreditado en este juicio. Salvo el hecho que podría establecerse aunando esta declaración con los documentos incorporados por la defensa de que entre la víctima y el acusado existían diversos hechos de violencia intrafamiliar, pero que dicha situación no tiene ninguna implicancia con lo acreditado en este juicio, ya que los hechos de la acusación se refieren a hechos de violencia que provendrían del acusado.

Con respecto a la declaración de Teresa de Jesús Fuentealba Mesías, quien entrega una teoría alternativa respecto de la forma de ocurrencia de los hechos contenidos en el Hecho N°3 en la acusación fiscal, al señalar que ella es la madre de la pareja del acusado al tiempo en que ocurrieron los hechos y refiriendo en síntesis que el día 14 de enero de 2020 su hija fue a un asado acompañada por el acusado, al parecer en un lugar dentro del mismo campamento Los Areneros, y ella oye una discusión entre el acusado y la víctima en donde el acusado reclamaría que le habrían causado daños en su camioneta, quebrado un vidrio, “partido la cabeza”. Entonces señala que hace pasar al acusado a su casa, quien se encontraba sangrando por haber sido atacado por su cónyuge y otras personas y que carabineros habría ingresado a su hogar sin autorización para detener al acusado, el cual se habría entregado tranquilamente sin que este al momento de ser detenido tuviera algún tipo de arma o cartucho con él o en su camioneta la que habría sido registrada por carabineros.

Que esta declaración realizada por esta testigo no resulta corroborable con ningún otro medio de prueba, y posee una serie de inconsistencias y afirmaciones muy difíciles de creer.

Refiere que al acusado le habrían causado daños en su camioneta, quebrado un vidrio, sin embargo, no se acompañó a este juicio ningún antecedente tendiente a acreditar dicho aserto, es así como no hay fotografías de la camioneta que pudiera dar, luz respecto de dese hecho, ni declaraciones de otro testigo que plantee esta situación. De hecho, la declarante refiere que la esposa del acusado, junto con “otras personas”, el día 14 de enero de 2020 en el Campamento Los Areneros estaban atacando y golpeando al acusado, pero su testimonio es el primero que refiere una situación como la referida, ya que ni siquiera la defensa en su alegato de apertura planteó esta teoría alternativa,

tampoco hay ningún antecedente de que existiera otra persona con la cual el acusado estuviera teniendo alguna discusión. No se escuchó ningún otro testimonio que refiriera que el día 14 de enero de 2020 el acusado fue atacado por su cónyuge y otras personas. Tampoco hay acreditación de las presuntas lesiones sufridas por el enjuiciado en la oportunidad referida por la deponente.

Así las cosas, esta declaración resulta poco creíble y aparece su declaración como una declaración aprendida y acomodaticia que intenta levantar una teoría alternativa carente de sustento, que contraría lo referido no solo por los funcionarios policiales, sino por el resto de la prueba incorporada.

En este sentido tampoco tiene este Tribunal antecedentes que permitan establecer fundadamente que los funcionarios policiales Aravena Torres y Melipil Vargas mintieron en juicio, por el contrario, sus declaraciones son, tal como se señaló, contundentes, coherentes, precisas y claras, apareciendo en su calidad de funcionarios policiales como testigos imparciales y objetivos, sin que se haya advertido la existencia de motivación alguna para que los deponentes dieran testimonio en falso, siendo el caso, además que sus dichos encontraron sustento en otros medios probatorios rendidos en juicio.

De la misma manera esta declaración tampoco entrega un origen alternativo respecto del arma artesanal y los cartuchos encontrados en poder del acusado.

Con respecto a la prueba documental incorporada por la defensa esta fue incorporada legalmente a juicio, no fue objetada por el Ministerio Público y corresponden a partes del expediente virtual correspondiente a la causa Ruc 1901134983-0, sin que existan antecedentes que permitan sostener su falsedad, por lo tanto se valoran positivamente y permiten acreditar lo en ellos contenidos, esto es que Ministerio Público solicitó audiencia para formalizar a Margarita Vega Fernández, como autora de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar en contra de su cónyuge, José Yañez Rojas, respecto de hechos ocurridos con fecha 18 de octubre de 2019 y que esa causa terminó por una suspensión condicional del procedimiento. Pero nada aporta respecto del establecimiento o desestimación de los hechos materia de este juicio.

DECIMO SEXTO: Otras alegaciones de la defensa. Que en cuanto a las alegaciones de la defensa realizadas en su alegato de clausura relativas a restar valor a las declaraciones de los funcionarios policiales presentados por el Ministerio Público, en atención a que ellos han reconocido en juicio que el ente persecutor les envió, previo a la realización del juicio copia del parte policial, serán desestimadas. Ello teniendo en cuenta que los funcionarios policiales participan en cientos de procedimientos, más aún si se toma en consideración que desde la época de ocurrencia de los hechos a la fecha han transcurrido más de un año, por lo que resulta imposible pensar, que sin entregarles algún antecedente respecto de que procedimiento se trata el juicio ellos pudieran entregar alguna declaración respecto de los hechos.

Así las cosas, se entiende que el objetivo de enviarles el parte es que puedan revisar sobre que procedimiento específico es el que versa el juicio, y de hecho, es esperable que ellos siempre revisen el procedimiento para saber sobre que deben deponer.

Sin perjuicio de lo recientemente razonado, la declaraciones de los funcionarios policiales igualmente resultó valorable positivamente porque estuvo dotada de detalles que evidentemente no están plasmados en el parte policial y que dan cuenta de que efectivamente ellos recordaban el procedimiento, entregando datos o apreciaciones adicionales que hacen que su versión sea creíble y que el tribunal pueda concluir que es efectivamente lo que percibieron por sus propios sentidos aquello relatado, y no solo lo que leyeron en el parte policial, que generalmente es mucho más escueto.

DECIMO SEPTIMO. Audiencia Especial de Determinación de Pena. Que en la oportunidad prevista en el **artículo 343 inciso final del Código Procesal Penal**, el Tribunal abrió debate acerca de circunstancias y factores relevantes para la determinación y cumplimiento de la pena, por los delitos de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar y de Porte de arma prohibida. Se dio la palabra a los abogados intervinientes para que señalaran lo que estimaren corresponda.

El **abogado fiscal** incorporó en audiencia especial de determinación de pena, el extracto de filiación y antecedentes del acusado David Alejandro Sandoval Godoy, documento que dio cuenta que el referido registra una serie de anotaciones prontuariales, por distintos ilícitos. Es así como refiere que constan las siguientes condenas en su extracto de filiación: en causa 342-2005 del 15 Juzgado de Garantía de Santiago de fecha 17 de agosto de 2005, por el delito de manejo sin la licencia profesional debida; en causa 39.583-2004 del 8 Juzgado del Crimen de San Miguel de fecha 2 de septiembre de 2009, por el delito del art. 196 D de la ley 18.290; en causa 461-2009 del Juzgado de Garantía de San Javier de fecha 3 de diciembre de 2009 por el delito de conducción en estado de ebriedad; en causa 8398-2009 del 6° Juzgado de Garantía de Santiago de fecha 12 de julio de 2010 por Conducción de vehículo sin la licencia profesional debida; y en causa 2787-2013 del 1° Juzgado de Garantía de Santiago de fecha 9 de enero de 2014 por el delito de receptación.

Solicita el acusado sea condenado a las penas requeridas en la acusación respecto de los delitos por los cuales fue condenado, esto es, a la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo, accesoria del artículo 29 del código penal, comiso de las especies incautadas e incorporación de la huella genética por el delito de Porte de Arma Prohibida y a la pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, accesoria del artículo 30 del código penal, accesorias de las letras B y C del artículo 9 de la ley 20.066 por el termino de 2 años por el delito de Amenazas en Contexto de Violencia Intrafamiliar.

La **defensa** señala que se condene a su representado a la pena de 3 años y 1 día, por el delito de porte de arma prohibida y que se le condene a 61 días por el delito de amenazas.

Señala que entiende que no puede ser acreedor de beneficios atendido a que la ley 17.798 no lo permite y no se presentó recurso ante el Tribunal Constitucional.

Solicita se le considere como abono todo el tiempo que ha permanecido privado de libertad en esta causa.

DECIMO OCTAVO: Determinación de la pena y forma de cumplimiento. Respecto del delito de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar se debe

tener presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 296 N° 3 del código Penal la pena asignada al delito es de presidio menor en su grado mínimo

Que al no concurrir circunstancias atenuantes ni agravantes el tribunal puede recorrer la pena en toda su extensión, por lo que teniendo en consideración la modalidad de ejecución de la amenaza y el riesgo generado a la víctima aplicará la pena en 300 días de presidio menor en su grado mínimo.

Que, atendido que no se ha acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley 18.216 y por la seguridad de la víctima, teniendo en consideración las circunstancias de comisión la pena impuesta deberá cumplirse de manera efectiva.

En lo que dice relación con el delito de Porte de Arma Prohibida de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la ley 17.798 la pena asignada al delito es de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo.

Que, teniendo en consideración lo dispuesto en el artículo 17 B de la ley 17.798 al no concurrir circunstancias modificatorias de responsabilidad el tribunal podrá recorrer la pena en toda su extensión, estableciéndola en definitiva en el rango de presidio menor en su grado máximo, estimando que este marco es el que satisface lo reprochable de la conducta y dentro de ese grado aplicará la pena en el máximo, esto es 4 años, tal como lo ha solicitado el Ministerio Público, teniendo en consideración las circunstancias de comisión y el hecho de que fue subsumido en este ilícito el de porte ilegal de municiones con lo cual aumentó el disvalor del injusto.

Que, atendido lo dispuesto en el artículo 1° de la ley 18.216 el acusado deberá cumplir estas penas de manera efectiva.

DECIMO NOVENO: Penas accesorias de la ley 20.066. Atendido que la Ley de Violencia Intrafamiliar establece la obligatoriedad de aplicar alguna de las medidas establecidas en el artículo 9 de la referida ley, este Tribunal acoge la solicitud del Ministerio Público en cuanto a las medidas accesorias, esto es, las del artículo 9 letra b) y c) de la Ley 20.066, considerando este Tribunal que es prudente aplicarlas por el plazo de dos años. Que estas penas accesorias deberán comenzar su cumplimiento una vez que el sentenciado recupere su libertad.

VIGESIMO: Abonos. Que el artículo 348 del Código Procesal Penal, prescribe al efecto que la sentencia definitiva *“fijará el tiempo de detención, prisión preventiva y privación de libertad impuesta en conformidad a la letra a) del artículo 155 que deberá servir de abono para su cumplimiento”* y que para estos efectos *“se abonará a la pena impuesta un día por cada día completo, o fracción superior a doce horas, de dichas medidas cautelares que hubiere cumplido el condenado”*.

En este sentido, según se desprende del apartado octavo del auto de apertura, se decretó prisión preventiva en esta causa el 15 de enero de 2020, la que se ha mantenido hasta la fecha.

De este modo en esta causa existen a la fecha la totalidad de 461 días de abono.

VIGESIMO PRIMERO: Comiso. Que de conformidad a lo establecido en el artículo 31 del Código Penal, se decretará el comiso de la NUE 3288137,

consistente en un arma artesanal tipo escopeta color dorado y los 3 cartuchos calibre 12 marca TEK.

VIGESIMO SEGUNDO: Determinación de huella genética. Que estos Jueces, no accederán a la solicitud del Ministerio Público en cuanto a ordenar la determinación de huella genética del imputado y su inclusión en el Registro de Condenados, por entender que el delito de Porte de Arma Prohibida, materia de la presente condena, no resulta comprendido dentro del catálogo de ilícitos taxativamente enumerados por el artículo 17 de la Ley 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN.

A mayor abundamiento y de acuerdo a lo dispuesto en el inciso final de dicho precepto que permite, excepcionalmente, ampliar el ámbito de aplicación del artículo 17 citado a delitos no contemplados en su catálogo, lo hace bajo expresa condición de que se trate de condenados a “penas de crimen”, lo que tampoco ocurre en este caso.

VIGESIMO TERCERO: Ley 18556. Que, siendo el delito de Porte de Arma Prohibida comprensivo de pena aflictiva, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 18.556, incorporado por la ley 20.568, de 31 de enero de 2012, sobre Inscripción Automática y Modificaciones al Servicio Electoral.

VIGESIMO CUARTO: Costas. Que, finalmente, se eximirá al acusado del pago de las costas de la causa, atendida la facultad establecida en el inciso final del artículo 47 del Código Procesal Penal, teniendo en consideración para ello que se encuentra privado de libertad desde hace más de un año y tres meses a la fecha y por haber sido condenado a pena privativa de libertad que debe cumplir de manera efectiva.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 14, 15 N° 1, 21, 24, 26, 29, 31, 50, 68, 69 del Código Penal; artículos 47, 295, 296, 297, 340, 342, 344 y 348 del Código Procesal Penal; artículos 2, 3, y 14 de la Ley 17.798, **se declara:**

I.- Que se **ABSUELVE** a **JOSE RAFAEL YAÑEZ ROJAS**, ya individualizado del delito de **AMENAZAS EN CONTEXTO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR** contemplado en el artículo 296 N° 3 del Código Penal en relación con el artículo 5 de la ley 20.066, que se dijo cometido el 23 de septiembre 2019, en la comuna de Puente Alto.

II.- Que se **ABSUELVE** a **JOSE RAFAEL YAÑEZ ROJAS**, ya individualizado del delito de **DAÑOS SIMPLES**, previsto y sancionado en el artículo 487 del Código Penal, que se dijo cometido el 23 de septiembre 2019, en la comuna de Puente Alto.

III.- Que se **CONDENA** al acusado **JOSE RAFAEL YAÑEZ ROJAS**, ya individualizado, a la pena de **TRESCIENTOS DIAS** de presidio menor en su grado mínimo y a la accesoria de **SUSPENSIÓN DE CARGO U OFICIO PÚBLICO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA**, por su responsabilidad como autor en el delito consumado de **AMENAZAS EN CONTEXTO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**, previsto y sancionado en el artículo 296 N° 3 del Código Penal

en relación con el artículo 5 de la ley 20.066, por los hechos acaecidos el día 14 de enero de 2020, en la comuna de Puente Alto.

IV.- Se le condena, asimismo, a las penas accesorias previstas en el artículo 9 letra b) y letra c) de la Ley 20.066, consistentes en la prohibición del condenado de acercarse a la víctima Margarita Isabel Vega Fernández o a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, así como a cualquier otro lugar al que ésta concurra o visite habitualmente, y la prohibición de porte y tenencia de armas de fuego, ambas por el término de dos años. Que estas penas accesorias deberán comenzar su cumplimiento una vez que el sentenciado recupere su libertad.

V.- Que se **CONDENA** al acusado **JOSE RAFAEL YAÑEZ ROJAS**, ya individualizado, a la pena de **CUATRO AÑOS** de presidio menor en su grado máximo y a la accesoria de **INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA PARA DERECHOS POLÍTICOS E INHABILITACIÓN ABSOLUTA PARA CARGOS U OFICIOS PÚBLICO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA**, por su responsabilidad como autor en el delito consumado de **PORTE DE ARMA PROHIBIDA**, previsto y sancionado en el artículo 14 en relación con el artículo 3° inciso 3° de la ley 17.798, por los hechos acaecidos el día 14 de enero de 2020, en la comuna de Puente Alto.

VI.- Que las penas privativas de libertad impuestas deberá cumplirlas en forma **EFFECTIVA**.

VII.- Que, en atención a que el imputado lleva a la fecha 461 días privado de libertad en esta causa, es que **la pena privativa de libertad por el delito de Amenazas en contexto de Violencia Intrafamiliar se le tendrá por cumplida**, sirviéndole el saldo de **161 días como abono** a la pena privativa de libertad impuesta por el delito de Porte de Arma prohibida.

VIII.- Que se decreta el comiso NUE 3288137, consistente en un arma artesanal tipo escopeta color dorado y los 3 cartuchos calibre 12 marca TEK

IX.- Que se exime al sentenciado del pago de las costas de la causa.

X.- Dese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 18.556.

Devuélvase a los intervinientes, en su oportunidad, los elementos de prueba incorporados en la audiencia.

Una vez ejecutoriado el presente fallo, dese cumplimiento al artículo 468 del Código Procesal Penal

Regístrese, dese copia y archívese en su oportunidad.

Sentencia redactada por la magistrada Marcela Alejandra Labra Todorovich.

RIT 18-2021

RUC 2000056071-6

SENTENCIA PRONUNCIADA POR LA SALA DEL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL
EN LO PENAL DE PUENTE ALTO, INTEGRADA POR LOS MAGISTRADOS

HUGO ESPINOZA CASTILLO, EN CALIDAD DE PRESIDENTE, FRANÇOISE GIROUX MARDONES COMO TERCER INTEGRANTE Y MARCELA LABRA TODOROVICH COMO REDACTORA. Los dos primeros subrogando legalmente siendo titulares del Sexto Tribunal de juicio Oral en lo Penal de Santiago; y la última como suplente del Tribunal Oral en lo Penal de Puente Alto. Los magistrados Hugo Espinoza Castillo y Françoise Giroux Mardones, habiendo concurrido al fallo, no firman la presente sentencia por encontrarse ejerciendo funciones en su Tribunal de origen.